

FOJA: 23 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-20625-2023
CARATULADO : MAMANI/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
(DS 895 - LOTE 3)

Santiago, veintiuno de Junio de dos mil veinticuatro

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Alberto Espinoza Pino, y la abogada Marta de la Fuente Olguín, domiciliados en Luis Thayer Ojeda 1737, depto. 32, Providencia y Simón Bolívar 8800, La Reina, en representación de **FERNANDO ENRIQUE MAMANI BRICEÑO**, profesor, domiciliado en Bayona Interior 5474, Puente Alto, deducen demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en Agustinas 1225, piso 4, Santiago; solicitando se condene al demandado al pago de la suma de \$300.000.000, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, desde la dictación de la sentencia y hasta el pago efectivo, más intereses desde que el demandado se constituya en mora o la suma que se estime ajustada a derecho, justicia y equidad, todo ello con costas.

Señalan que **Fernando Mamani Briceño**, se encuentra reconocido por la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech, bajo el número 13845; cuenta que el 13 de mayo de 1988, tenía 24 años de edad, al regresar a su casa en Avda. La Feria comuna de Pedro Aguirre Cerda, fue interceptado por personal de civil armado, quienes inmediatamente lo esposaron, vendaron de ojos, y comenzaron a golpear e interrogar, lo amenazaban con pistolas en la cabeza, simulando dispararle, pensó que lo iban a matar. Luego lo sacaron de la casa esposado y vendado y lo subieron a un auto y lo llevaron a un lugar, sin saber dónde, ahí estuvo varios días, lo desnudaron, amordazaron, le aplicaron corriente en todo el cuerpo, continuaban las interrogaciones y los golpes. Después de varios días le tomaron fotos y sus huellas dactilares, lo



ficharon, ahí supo que estaba en un Cuartel de Investigaciones de Chile, con agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Indican que luego fue llevado a la Fiscalía Militar, lugar donde fue interrogado y posteriormente enviado a la Penitenciaría, estuvo varios días incomunicado, sin alimentación ni aseo, después de 10 o 15 días aproximadamente pasó a la calle de presos políticos. Después de varios meses fue trasladado a la Cárcel Pública y días antes del plebiscito de octubre de 1988, salió en libertad, pero con firma semanal en la Fiscalía Militar.

Añade que no pudo trabajar ni estudiar, ya que tenía antecedentes hasta el año 2000-2002, aproximadamente, tampoco podía salir del país porque tenía orden de arraigo. Después la Corte de Apelaciones de San Miguel lo sobreseyó y luego de varios años pudo limpiar sus antecedentes.

Finaliza señalando que su familia presentó recursos de amparo pues para ellos se encontraba desaparecido y pese a que recorrieron diversos lugares, su detención era negada, detención que además de ser prolongada en el tiempo, fue injusta, arbitraria y sin derecho.

En cuanto al daño moral reclamado, sostienen que emana directamente del secuestro y la tortura de que fue víctima el actor, desprendiéndose, inequívocamente, perjuicios tanto psíquicos como físicos provocados por el Estado de Chile.

Respecto a la prueba del daño, refieren que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen de manera reiterada que, el daño moral, no requiere ser probado en sede judicial.

Como fundamentos jurídicos de su pretensión invocan los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso 2° de la Constitución Política; que establecen la responsabilidad del Estado; además cita jurisprudencia y señala algunos tratados internacionales que regulan la materia

A folio 8, rola el acta de la notificación de la demanda, practicada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el 22 de Diciembre de 2023.



A folio 9, compareció el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, evacuando la contestación de la demanda, alegando las siguientes excepciones y/o defensas: **I)** Excepción de reparación integral. **II)** En subsidio, excepción de prescripción extintiva de 4 años, en subsidio, de 5 años, ambas contempladas en el Código Civil. **III)** En subsidio, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En cuanto a la excepción de reparación integral, sostiene en síntesis que resulta improcedente la indemnización alegada por haber sido reparado el demandante, principalmente a través de tres tipos de compensaciones, (a) reparación mediante transferencias directas de dinero, (b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas.

Respecto a la prescripción manifiesta que de acuerdo con el relato efectuado por el demandante, aun cuando se considerase que la prescripción estuvo suspendida durante el período de la dictadura militar, a la fecha de notificación de la demanda, igualmente han transcurrido en exceso los plazos de prescripción extintiva de 4 y 5 años que establecen los citados artículos 2332 y 2515 ambos del Código Civil. Agregando, que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre una declaración expresa, la que en este caso no existe.

Por último, en lo tocante a la regulación del daño moral, señala que se debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; finalmente,

A folio 12, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y derecho invocados en el libelo indemnizatorio, controvirtiendo y solicitando el rechazo de las excepciones y/o defensas opuestas por el Fisco de Chile.

A folio 14, el Fisco evacuó el trámite de la réplica, reiterando las argumentaciones expuestas en su contestación de la demanda e insistiendo en sus excepciones de fondo.



A folio 15, se recibió la causa a prueba.

A folio 29, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: A folio 1 comparece el abogado Alberto Espinoza Pino, y la abogada Marta de la Fuente Olguín, en representación de **FERNANDO ENRIQUE MAMANI BRICEÑO**, deducen demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, en contra del **FISCO DE CHILE**, solicitando se condene al demandado al pago de la suma de \$300.000.000, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, desde la dictación de la sentencia y hasta el pago efectivo, más intereses desde que el demandado se constituya en mora o la suma que se estime ajustada a derecho, justicia y equidad, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, notificada en forma legal la demanda, fue contestada conforme las alegaciones y defensas reseñadas en la parte expositiva, mismas que las partes replicaron y duplicaron oportunamente.

TERCERO: Con el objeto de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió prueba consistente en:

Instrumental:

A folio 1:

1.- Copia simple del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, respecto del demandante.

A folio 21:

2.- Copia de la carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos que contiene los antecedentes de la Comisión Valech.

3.- Informe psiquiátrico y psicológico de Evaluación de Daños de Fernando Mamani, evacuado por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS.



4.- Norma General Técnica N° 88, para la Atención de Personas Beneficiarias del Programa de Atención en Salud a las Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el Período 1973-1990 del Departamento de salud mental de la División de prevención y control de enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Pública del Ministerio de Salud”.

5.- Capítulos V y VIII del Informe Valech, relativos a “los métodos de torturas” y “a las consecuencias de las torturas en las víctimas, a nivel psicológico, familiar, sexual, entre otros”.

Testimonial:

A folio 25: Constan las declaraciones de los testigos **Gabriel García Corales**, conductor; **Margarita Soledad Villanueva Pozo**, trabajadora; quienes legalmente juramentados y sin tacha dieron razón de sus dichos; esto es, en síntesis, corroboraron las circunstancias en que practicó la detención del demandante Fernando Mamani, las torturas de que fue objeto, así como los daños físicos y psicológicos que ello le provocó en el tiempo futuro.

CUARTO: A su turno la parte demandada solicitó, en el primer otrosí del escrito de contestación de la demanda, se oficiara al Instituto de Previsión Social para informe sobre los montos percibidos por el demandante, en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992 y 20.874.

A folio 16, se allegó el oficio del Instituto de Previsión Social, emitido con fecha 14 de Enero de 2024, informado: que **Fernando Enrique Mamani Briceño, cédula de identidad 9.496.113-0;** en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), es beneficiario de las leyes 19.992 y 20.874, y ha percibido los siguientes montos: **(a)** \$36.893.449, por concepto de pensiones; **(b)** \$1.000.000, como aporte único; **(c)** \$659.680, por concepto de aguinaldos. Asimismo, percibe una pensión mensual que al mes de febrero de 2024 ascendía a \$242.262.

QUINTO: Que, son hechos que constan en la causa por no haber sido objeto de controversia, más aún se encuentran acreditados con el mérito de los



documentos reseñados en los motivos anteriores, especialmente la carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acompañada a folio 21, y el oficio evacuado por el Instituto de Previsión Social agregado a folio 16, los siguientes:

1.- Que Fernando Enrique Mamani Briceño, cédula de identidad 9.496.113-0, está reconocido en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura individualizado bajo el N° 13.845; militante de las Juventudes Comunistas, estuvo detenido entre el 13 de mayo y el 25 de agosto de 1988 (**3 meses y 12 días**), en el Cuartel de Investigaciones de Gral. Mackenna, lugar donde fue torturado, sometido a interrogatorios, golpizas brutales, aplicación de electricidad, lo desnudaron, sufrió amenazas de muerte, entre otros; además estuvo detenido en la Penitenciaria y la Cárcel Pública, para posteriormente ser puesto a disposición de la 1ra. Fiscalía Militar. Fue condenado en causa Rol 856-88 por infracción al Art. 8 y 13 de la Ley de Control de Armas. Al momento de su detención se presentó un recurso de Amparo en su favor, Rol 571-88.

2.- Que en su calidad de víctima de represión política ha recibido por aplicación de las Leyes 19.992 y 20.874 un total de \$38.553.129 por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos; y asimismo, percibe una pensión mensual que al mes de febrero de 2024 ascendía a \$242.262.

SEXTO: Que, resulta necesario y oportuno dejar consignado que el 11 de noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile”, cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865



personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

SEPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que “Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”, cuyo artículo primero, contenido en el Título I “De la pensión de reparación y bono”, dispone: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284.- para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a \$ 1.549.422.- para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, preceptúa que la referida pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$



3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono se devengaran a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, mismas que podrían impetrarse desde la publicación de la misma ley.

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que “Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Por su parte el inciso tercero, señala: *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*

NOVENO: Que, en cuanto al demandante **Fernando Enrique Mamani Briceño**, detenta la calidad de “Prisionero Político y Torturado”, constando en autos que han percibido, en tal calidad, las sumas señaladas en el motivo quinto de este fallo, lo que lleva a establecer que el actor ha sido y es beneficiario de las Leyes 19.992 y 20.874, respectivamente.

DECIMO: Asentado lo anterior, toca referirse a las defensas del Fisco, primeramente alegó la excepción de reparación integral o satisfactiva, fundada, como ya se explicitara, en que el actor ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.992,



19234, 20.134 y 20.874; resultando, en consecuencia, improcedente ser indemnizado por daños cuya génesis radica en los mismos hechos.

Al respecto, es necesario señalar que tal como lo sostuvo la jurisprudencia, la Comisión Valech no pretendió, en estricto rigor, efectuar una “transacción” con cada uno de los beneficiados para así precaver la interposición de una acción como la del caso de autos; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser los actores beneficiarios de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de “prisioneros políticos torturados”, tal hecho no es óbice para que los afectados interpusieran la acción indemnizatoria del caso de autos.

Por lo demás, la situación que afectó al demandante está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que el demandante **Fernando Enrique Mamani Briceño**, está reconocido como víctima de prisión política y tortura, y en tal calidad, los perjuicios que reclama se enmarcan dentro de aquellos denominados extrapatrimoniales, particularmente el “daño moral” y la indemnización por este concepto es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos experimentados que consistieron en las violaciones a los derechos humanos de los demandantes, configurándose así la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado y que no ha sido íntegramente reparado.



Por las circunstancias anotadas precedentemente, la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco no podrá prosperar.

UNDECIMO: El Fisco también opuso la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, fundada en los argumentos explicitados también con anterioridad en el presente fallo.

Al respecto sólo caber tener especialmente presente que del tenor literal del Artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, fluye que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Constitución establece; y que dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, a través de dicha disposición constitucional, se incorporan al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, entre las que destaca el deber de indemnizar o reparar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; adquiriendo rango constitucional.

A su turno la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, señaló al respecto que, *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió*



también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.”

En conclusión, según lo expresado las excepciones de prescripción principal y subsidiaria serán desestimadas, por encontrar ambas su fundamento en normas de derecho interno, preceptos que, como ha quedado claramente explicitado en el presente fallo, no son aplicables al caso de autos.

El argumento anterior, además ha sido reiterado en un fallo de fecha **6 de junio de 2023**, que señala en su considerando “...**Octavo:** *Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno.*



En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. “Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”. C.S Rol N° 130.949-2020.

DUODECIMO: Que, habiéndose desestimado las excepciones de reparación integral y de prescripción de la acción civil, toca pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como se ha venido expresando, se encuentra acreditado que el actor **Fernando Enrique Mamani Briceño**, detenta la calidad de Prisionero Político y Torturado, por lo que es del todo plausible presumir que la detención y vejámenes que padeció, se debieron al hecho de sus convicciones políticas y sociales, vinculadas a las juventudes comunistas.

Que siendo dichas circunstancias las que motivaron su detención y posterior tortura, física y psicológica, es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del Estado en su persona, debieron necesariamente afectar el estado físico y emocional del demandante, de manera inmediata y durante el período que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros.

Asimismo, con el mérito de los informes psicológicos generales y particular, acompañados a folio 21, unido a la prueba testimonial rendida a folio 25, es posible tener por acreditado fehacientemente daños físicos y psicológicos causados por agentes del Estado al demandante **Fernando Enrique Mamani Briceño**, cuyas secuelas deben ser reparadas, por cuanto es



deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo tolerable bajo ningún respecto que sus agentes hayan lesionado los derechos fundamentales del demandante, por lo que el Estado debe responder.

DECIMO TERCERO: Así las cosas, los perjuicios experimentados por el actor sólo se puede enmarcar dentro del denominado “daño moral”, por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva a determinar el monto de los perjuicios que las víctimas de violaciones a los Derechos Fundamentales sufrieron en el régimen militar.

Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar los daños y la aflicción, mismos que no solo son posibles de presumir fundadamente, sino también por el principio de normalidad de las cosas, que indica que cualquier persona que es o ha sido objeto de apremios ilegítimos y torturas por agentes del Estado sufre daños que deben ser reparados en todos sus extremos.

En esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, esta sentenciadora considera como aspectos relevantes las siguientes circunstancias: **(a)** que el demandante detenta la calidad de Prisionero Político y Torturado, y en tal condición fue sometido a una detención ilegal, vejámenes y torturas por agentes del Estado quienes lesionaron sus derechos fundamentales a la integridad física y psíquica; y **(b)** las indemnizaciones fijadas por los tribunales superiores de justicia en circunstancias análogas.

DECIMO CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior y que, además, se viene desestimando la excepción de reparación integral y/o satisfactoria, esta sentenciadora es del parecer de considerar en la indemnización final, los montos percibidos por el actor al amparo de las Leyes 19.992 y 20.874, que ascienden a favor de **Fernando Enrique Mamani Briceño a \$38.553.129**, por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos; teniendo presente para ello la naturaleza de dichas prestaciones otorgadas por el Estado en este tipo de materias.



En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber la ley 19.992 y la 20. 874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse especial atención que el hecho ilícito es la causa adecuada del beneficio y del daño, es decir, que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado tendientes a lograr intentar reparar el daño causado, lo que en ningún caso inhibe o coarta el derecho a que las personas que se sienten perjudicadas o insatisfechas accionen y soliciten la reparación integral de su daño.

A mayor abundamiento, tanto las leyes de reparación como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

Así las cosas, la regla de la *Compensatio lucri cum damno* es un principio de imputación de daños, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo daño del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo además la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral por ser víctimas de la Responsabilidad del Estado, el monto ya referido y otorgado estos años debe ser considerado en la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como en el mismo sentido lo resolvió la Sentencia Ingreso Corte 1763-2020, de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, regla que puede ser aplicada de oficio, pues tiene relación con la evaluación del monto del daño y no con la compensación de una obligación con otra, cuyo no es el caso, por lo que tal como sostiene Luis Diez Picasso es mejor hablar de imputación o computación de beneficios.

DÉCIMO QUINTO: Que considerar el monto que han recibido no significa descartar que todo daño deba ser íntegramente reparado. Citando al profesor Llamas Pombo “*difícil es ponderar la correcta valoración del sufrimiento, la pena, angustia, las vivencias desagradables e incluso el*



trauma psíquico, más aún traducir a una categoría diferente la de la reparación económica de los daños morales y ello queda en definitiva a la prudencia de los tribunales, dentro de los límites de las pretensiones resarcitivas producidas en la causa” (Eugenio Llamas Pombo. “Las formas de prevenir y reparar el daño”. Wolters Kluwer, España 2020, pág.203.)

Por su parte, en la doctrina nacional, la profesora Domínguez Hidalgo refiere que la forma predilecta y más eficiente de tutela personal es la acción indemnizatoria. En la especie, *la acción de responsabilidad civil alcanza esa eficiencia porque es la única acción civil que se funda precisamente solo en la condición de persona. Siguiendo a López Jacoste, la responsabilidad civil se ha constituido en una garantía genérica de plenitud personal* (Carmen Domínguez Hidalgo. “El Principio de reparación integral en sus contornos actuales”, Thomson Reuters, año 2019, pág. 87)

Conviene destacar que la Ley 19.992 en su mensaje destaca que *“la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional del Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile”*. Eso hizo necesario la dictación de la ley en reconocimiento a aquellas víctimas y debe el Estado *“entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.*

Por otro lado, además, el principio de “reparación integral”, encuentra su reconocimiento en el artículo 2329 del Código Civil, el que dispone que todo daño que se pueda imputar a otra persona, debe ser reparado por ésta.

DECIMO SEXTO: Que, en plena armonía con lo señalado precedentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su parecer en cuanto a la idoneidad de los mecanismos de reparación a nivel interno.

Al efecto, en el caso “Órdenes Guerra y Otros vs Chile”, La Corte IDH se refirió a la compatibilidad y complementariedad de las reparaciones de carácter administrativas con aquellas de naturaleza judicial *-párrafo 98.-*, y estimó que no existe impedimento u obstáculo para que pueda tomarse en cuenta, en una vía, lo otorgado en la otra. Reiterando la doctrina fijada en el



caso “García Lucero vs Chile”, en orden a que los programas administrativos de reparación no podían obstaculizar el acceso a la reparación judicial. Agregando que ambos tipos de indemnizaciones podían legítimamente considerarse como diferentes o complementarias, pero lo que no podía ocurrir, es que los programas administrativos significaran el cierre de la vía judicial.

La misma línea argumentativa desarrolla el profesor Matías Meza-Lopehandía G., en su artículo “la obligación de reparar por los delitos de lesa humanidad” de mayo de 2019, concluyendo que los programas administrativos de reparación pueden o no ser considerados como parte de la reparación judicialmente establecida, lo que este sentenciador considera que son compatibles y complementarios, pues nada impide “*tomarse en cuenta en una vía lo otorgado por la otra*”, artículo ya citado.

DECIMO SEPTIMO: En consecuencia, siendo perfectamente compatibles y complementarios los beneficios pecuniarios otorgados por las leyes de reparación con las indemnizaciones que otorga el poder judicial; ello no es óbice para que, por esta vía, se conceda un monto por todo aquél daño extrapatrimonial que se estima no ha sido íntegramente reparado.

Se cumple así con el principio de la “reparación integral del daño”, cuyo reconocimiento no sólo es aceptado en la doctrina, sino que también fundamenta los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando fuerza a los argumentos propios de la responsabilidad civil, cuya función central y primordial del derecho es la reparación integral de los daños causados.

Así también lo plantea el profesor Ramón Domínguez Águila, en su publicación sobre “Los límites al principio de reparación integral”, en el cual expresa que el principio de reparación integral es uno esencial en la responsabilidad civil en la actualidad. Su contenido impone que la medida de la reparación corresponda con la entidad del daño causado, dejando fuera cualquier otra consideración.

DÉCIMO OCTAVO: Que en base a todos los aspectos examinados precedentemente, se fijará la indemnización de perjuicios, por daño moral, que



deberá pagar el Estado al demandante, en su calidad de víctima de violación a sus derechos fundamentales en la suma única y total de 35.000.000 (**treinta y cinco millones de pesos**), la que se estima justa y equitativa, considerando que el actor es beneficiario de las leyes de reparación respectivas ya indicadas.

El monto indemnizatorio fijado, deberá pagarse debidamente reajustado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde que el Fisco incurra en mora, esto es, desde la notificación del cumplimiento incidental.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el demandado Fisco de Chile.

2.- Que, **se acoge** la demanda intentada a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar a **Fernando Enrique Mamani Briceño**, la suma única y total de **\$35.000.000.-**, en la forma señalada en el considerando **décimo octavo**.

3.- Que, **no se condena** en costas al Fisco de Chile, por tener la obligación de defender los intereses del Estado.

Rol C-20625-2023.-

Regístrese, notifíquese y elévese en consulta si no se apelare.

Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, jueza titular.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Junio de dos mil veinticuatro**



